

MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACION POLITICA (*)

Por RAMON ADELL ARGILES

SUMARIO

I. INTRODUCCIÓN: 1. *Viejos y nuevos movimientos sociales*. 2. *Interés del estudio de la acción colectiva*.—II. PUNTO DE PARTIDA: 1. *Perfil del manifestante*. 2. *Cifras oficiales*.—III. ESTUDIO DE LAS MANIFESTACIONES: 1. *¿Grupos o masas?*
2. *El espacio simbólico*. 3. *Ciclos de movilización*.

I. INTRODUCCION

1. *Viejos y nuevos movimientos sociales*

La ausencia de previsión ante campañas movilizadoras por parte del *poder* en un conflicto social muestra la extraordinaria separación que existe a veces entre la ciudadanía y la clase política. Las oleadas de conflictividad y manifestaciones pueden indicar la existencia de cierta rigidez de los cauces de representatividad y participación institucional del sistema político.

Quizá para el estudio de lo que se ha calificado de «nueva política» (Dalton), de «nuevo populismo» (Habermas), de «neorromanticismo» (Schimark), de «antipolítica» (S. Berger) o de «nuevos movimientos de protesta» (K. W. Brand) hay que recurrir a fórmulas no convencionales.

A principios de siglo, el estudio de la acción colectiva se abordó desde múltiples perspectivas teóricas. Así, desde el punto de vista psicosocial (G. Le Bon, Ortega, G. Tarde, E. Canetti, S. Moscovici, S. Tchakotine, etc.) se ha intentado determinar cuáles son los comportamientos de la acción colectiva, concluyéndo-

(*) Comunicación presentada a las Jornadas Internacionales sobre *Comportamiento político y electoral*, celebradas en la UNED el 26 de febrero de 1992, en la sesión sobre «Participación política y nuevos movimientos sociales».

se que los fenómenos de masa son comportamientos agregativos en donde la manipulación de líderes carismáticos deja al individuo indefenso y «fuera de sí». En los años cincuenta, Smelser achacó a la modernización económica, política y cultural la causa del aumento de movilizaciones no institucionales. En los setenta, muchos autores se adentran en dar explicación a la «espontaneidad» o moda de la acción colectiva (R. Zorrilla, R. Arón, J. Meynaud, J. Beauchard, T. Adorno, J. Beaudrillard, Alberoni, etc.). Ya en los años ochenta se abandona el argumento de «comportamientos irracionales» o del concepto de privación absoluta y frustración (R. Gurr, Davis) como única causa de estos fenómenos. Incluso la privación relativa no explica todas las formas de acción. Tal como afirma Offe, los nuevos movimientos sociales critican «los efectos perversos de la modernización». La utopía social sustituye en muchos casos a las utopías políticas. En la actualidad, Tilly, Tarrow y Banfield, entre otros, coinciden en que la conducta colectiva es a menudo resultado de una acción racional y, en ocasiones, calculada.

El debate de «los nuevos movimientos sociales» no se puede restringir, por tanto, a las teorías llamadas: 1) macroanalíticas o estructurales, o 2) microanalíticas o psicológico-culturales. Ambos modelos, estáticos o dinámicos, siguen siendo insuficientes. A mi juicio, existe de forma soterrada un cierto temor o apasionamiento —según los casos— a la hora de evaluar los «nuevos» valores que rigen y dirigen dichos movimientos. Así, en parte, el debate se presenta entre los que achacan estos fenómenos al posmaterialismo («nueva izquierda») y los que consideran el fenómeno como el advenimiento del neocorporativismo. Estos teóricos debaten el advenimiento y/o crisis del modelo participativo del llamado Estado de bienestar (EBK).

Los criterios de inclusión de un colectivo determinado dentro de un sector ideológico o movimiento social concreto sigue siendo una labor inconclusa y que determina, en gran medida, los resultados de cualquier investigación. Autores cualificados como A. Touraine, A. Melucci, T. R. Villasante, Castells, Kaase, S. Giner, etc., han intentado avanzar en ello.

A la hora de saber qué son y cuáles son los movimientos sociales y sus delimitaciones, nos encontramos con cientos de siglas de colectivos, organizaciones, federaciones, sindicatos, plataformas, coordinadoras, etc., que dificultan enormemente el trabajo, a pesar de la buena intención del investigador. Por tanto, resultaría importante debatir y delimitar cuáles son los movimientos sociales (viejos y nuevos) existentes tras un análisis de las organizaciones e intereses que integran esa «identidad» que denominamos movimiento.

Los comúnmente llamados movimiento juvenil, de la mujer, ecológico, de la nueva consciencia, etc., serían, pues, *networks* o áreas de un movimiento (Melucci), entendido éste como la redes de grupos que comparten una identidad y cultu-

ra colectiva. El criterio de autoubicación de una organización dentro de un movimiento ayuda, pero no determina su inclusión en uno u otro. Tampoco pueden ser sus protagonistas —al menos en exclusiva— los que teoricen sobre el mismo (Touraine). En mi opinión, el tipo organizativo de un colectivo tiene, en la mayoría de los casos, mayor preponderancia que los rasgos ideológicos que lo acompañan. Así, por ejemplo, un sindicato pertenecerá al movimiento sindical, obrero o laboral, con independencia de su ideología o intereses de clase (CC.OO., UGT, CNT, FNT...). Así, pues, un movimiento difícilmente tendrá una organización unitaria, con líderes estables, con un espectro ideológico rígido, etc., del mismo modo que los lazos que unen a sus seguidores son horizontales y no verticales, como en los partidos políticos. Touraine consideraría alguna de estas organizaciones como antimovimientos. El pulso «por el derecho al aborto/defensa de la vida» sería un caso concreto de polarización proactiva y reactiva. En mi opinión, no son un movimiento frente a otro, sino una campaña concreta del movimiento feminista (ALT) frente a otra antagónica de sectores conservadores (DER, EDE). Incluso dentro de un mismo movimiento las polarizaciones ideológicas existen (ideología, radicalización, fines, etc.). Así, en el movimiento sindical, aun presuponiendo que todos los sindicatos quieren mejoras laborales, existen enormes matices entre ellos (intereses de clase, gremiales, corporativos, amarillismo, asamblearios, etc.). Frente al movimiento sindical emerge el movimiento corporativo (de difícil estudio sin un análisis de las nuevas categorías ocupacionales). En el movimiento alternativo las acciones no violentas de los pacifistas difieren en ocasiones de la radicalidad de los antimilitaristas. Dentro del ecologismo ocurre otro tanto con sectores antinucleares, ambientalistas, naturistas y de «nueva conciencia».

2. *Interés del estudio de la acción colectiva*

Partiendo de la idea de que una sociedad sin conflictos es una quimera, se puede afirmar que una mayor presencia de los movimientos sociales indica el asentamiento del sistema democrático. La excesiva politización de los conflictos es típica de períodos de transición política, y con la consolidación de la democracia los movimientos sociales tienen mayor presencia y protagonismo, en detrimento de antagonismos ideológicos. Ello se contradice, pues, con los argumentos de Golstone, que identifica la aparición de movimientos sociales con tiempos de crisis, a menos que nos refiramos a otros tipos de «crisis» no cuantificables con los actuales indicadores económicos y sociales utilizados corrientemente para dicho diagnóstico.

Una cierta despolitización es incluso positiva si con ella aumenta la fluidez participativa —asociativa o individual— a través de otros cauces existentes al

efecto (participación electoral, asociaciones de amas de casa, consumidores, deportivas, Juntas de Arbitraje, iniciativas legislativas populares, mesas de negociación, afiliación a ONGs, etc.). Sin embargo, el afianzamiento de estas formas participativas es desigual y aparentemente contradictoria.

En toda sociedad, la demanda, la disconformidad o la simple protesta desemboca corrientemente en conflictos. Si, además, la sociedad es democrática y participativa, la manifestación pacífica en la vía pública constituye una ritualización del conflicto que emplean ciudadanos, grupos de presión, partidos políticos y movimientos sociales, como cauce para «hacerse oír» ante la opinión pública, llevando a cabo así la acción colectiva.

Habitualmente todas las movilizaciones sociopolíticas no son un fin en sí mismas, sino que van acompañadas de otras formas de participación institucionalizadas y más o menos convencionales (asambleas, huelgas, paros, recogida y entrega de firmas, celebraciones, parodias y actividades festivas, envíos masivos de cartas, negociaciones, etc.) y de presión no institucionales e incluso violentas (*boicots*, sabotajes, desobediencia civil, huelgas salvajes, violencias sobre bienes o personas, etc.).

Pero, ¿cuál es la utilidad sociológica de un examen *a posteriori* de la conflictividad política y social manifestada en la calle? El seguimiento de la actividad de cada sector político o movimiento social en estos años permite conocer a historiadores, politólogos y sociólogos el protagonismo y el apoyo popular con que han contado las distintas campañas, oleadas reivindicativas o ciclos de protesta.

Por lo general, y tal como se refleja en las presentes Jornadas, la sociología política se ha centrado más en el estudio de otra forma de participación política, sin duda más importante y decisiva, como es el comportamiento electoral. El auge de los llamados nuevos movimientos sociales obliga, sin embargo, a no perder de vista otras formas de comportamiento colectivo, cuyos resultados nos explicarían, en muchos casos, fenómenos como el aumento de los porcentajes de abstención electoral. Los resultados de las encuestas sobre autoubicación política (escala de 1 a 7 o de 1 a 10) se muestran cada vez menos indicativas, siendo necesario incluir preguntas que nos evalúen las simpatías de los electores hacia movimientos sociales o colectivos concretos.

El estudio de los fenómenos colectivos necesita, además de valoraciones cualitativas y de marcos teóricos *ad hoc*, técnicas empíricas que puedan acercarnos a la comprensión de estos fenómenos de identidad colectiva, corporativa, de clase, cultural, etc., en donde intervienen una compleja pluralidad de variables interdependientes. Las reuniones de grupo y los *settings*, empleadas por A. Tournaine o Melucci, pueden ayudar a conocer otras características de los movimientos sociales (organización, liderazgo, ideología...).

Otros estudios, empíricos y cuantitativos, realizados sobre el mismo fenómeno, proporcionan interesantes y dispares orientaciones metodológicas, así como sugerentes hipótesis de trabajo. Autores como Kriesberg, Ch. Tilly, J. María Maravall, D. Tartakowsky, I. Fernández Castro, R. Gurr, G. Ragache, R. Zorrilla, S. Tarrow, MacCanell, entre otros, han realizado estudios similares sobre conflictos concretos en éste y otros países.

La finalidad de la investigación que aquí resumo, en forma de comunicación, es definir el concepto de manifestación; perfilar el ejercicio de un derecho, analizar modos y maneras de desenvolverse una movilización, desde el momento de su convocatoria hasta aquel de su total disolución; encontrar las relaciones existentes entre desarrollo del marco político y práctica del derecho de manifestación; estudiar la manifestación como medio de participación política y como indicador de la cultura política de un país, y evaluar el comportamiento de los manifestantes como un indicador del grado de su socialización política.

Junto a los manifestantes se encuentran dos tipos de coparticipantes *cuasi forzosos*: las Fuerzas de Seguridad y la prensa (Tilly añade, los curiosos, y R. Zorrilla, a los destinatarios de la demanda). Se estudia, por tanto, la influencia de la presencia o ausencia de estos actores y la repercusión del fenómeno en los *mass media* y en la opinión pública.

II. PUNTO DE PARTIDA

Empezaremos preguntándonos, ¿cuántos y quiénes son los que se movilizan?, así como cuál es el objetivo de manifestaciones y protestas que conforman el objeto de estudio.

1. Perfil del manifestante

Para indagar cuál es el perfil sociológico del manifestante recurriremos aquí al estudio IOP, número 1.137, de junio de 1977 (véase Cuadro 1). La muestra de Madrid-capital se basa en 881 encuestados, mayores de veintiún años, aún a sabiendas de que los datos no son del todo significativos debido al alto porcentaje de los ciudadanos que no asisten nunca a este tipo de reuniones y los que no contestan. De dicha investigación se extraen las siguientes observaciones:

Un 6 por 100 de los entrevistados afirma haber asistido a manifestaciones (frente al 88 por 100 que lo niega y el 6 por 100 que no contesta), pudiéndose comparar dichas cifras con las de asistentes a mítines, que alcanzan el 22 por 100 de los entrevistados. Tres de cada cuatro manifestantes que afirman asistir son

Cuadro I

PERFIL SOCIOLOGICO DEL ASISTENTE A MITINES Y MANIFESTACIONES

(Madrid, junio de 1977)

	Ha asistido a mítines					Ha participado en manifestaciones			
	Total	Sí	No	NC	%	Sí	No	NC	%
TOTAL	881	22	73	5	100	6	88	6	100
Sexo:									
Hombres	325	28	66	6	100	10	84	6	100
Mujeres	556	18	76	6	100	3	91	6	100
Edad:									
De 21 a 30 años	195	39	55	6	100	17	78	5	100
De 31 a 40 años	159	22	65	13	100	4	84	12	100
De 41 a 50 años	209	17	77	6	100	1	93	6	100
De 51 a 60 años	141	18	79	3	100	5	91	4	100
Más de 60 años	154	8	90	2	100	1	96	3	100
Estado civil:									
Solteros	138	33	61	6	100	16	78	6	100
Casados	647	21	73	6	100	4	89	7	100
Otros (viudo, separado)	90	9	88	3	100	2	94	4	100
Estudios:									
Primarios, no sabe leer	29	10	86	4	100	—	97	3	100
Primarios, sabe leer	307	10	82	8	100	1	91	8	100
Primarios completos	225	21	75	4	100	3	92	5	100
Formación Profesional	24	29	54	17	100	4	79	17	100
Bachiller Elemental	74	26	70	4	100	8	88	14	100
Grado Medio	62	34	63	3	100	16	81	3	100
Universitario	78	49	49	2	100	18	79	3	100
NC	6	17	83	—	100	17	83	—	100
Situación laboral:									
Trabaja	348	27	66	7	100	9	84	7	100
Está parado	20	40	60	—	100	20	80	—	100
Jubilado	62	10	85	5	100	2	94	4	100
Estudiante	41	59	34	7	100	27	66	7	100
Sus labores	398	15	80	5	100	1	93	6	100
Ocupación:									
Jornaleros del campo	38	11	84	5	100	—	95	5	100
Trabajador manual	444	26	69	5	100	8	87	5	100
Obreros cualificados	293	20	71	9	100	4	88	8	100
Obreros s/cualificar	67	10	88	2	100	7	91	2	100
NC	39	13	82	5	100	3	92	5	100

varones. Por su parte, de las mujeres sólo un 3 por 100 del total de las entrevistadas afirma participar. Los jóvenes de veintiuno a treinta años son, sin duda, los más activos (el 17 por 100), mientras que los mayores de cuarenta años y menores de sesenta son los menos activos. Respecto al estado civil, el «manifestante tipo» puede considerarse soltero. Las personas con estudios son las que se movilizan más. Destacan entre ellas los universitarios (18 por 100), seguidos por los estudiantes o personas con estudios de grado medio y bachiller. Un 27 por 100 de los que en dicho momento estudiaban sentía apego por la movilización, seguidos de un amplio sector de parados (dos de cada diez). De los que trabajan, los trabajadores manuales y obreros no cualificados con los más activos.

Otro cruce de variables que resulta curioso analizar es la relación entre el factor religiosidad (frecuencia de asistencia a misa) y la participación en manifestaciones. A grandes rasgos, se observa cierta incompatibilidad entre la asistencia a ambos tipos de «manifestaciones» (religiosas y políticas). Así, dos de cada diez personas que «no van nunca» a misa dicen asistir a manifestaciones (19 por 100). Entre los que cumplen sus deberes religiosos se observan bajos porcentajes de movilización. No así en un 6 por 100 de los que van a misa «más de una vez por semana», que confiesan participar en manifestaciones.

Cuadro 2

FRECUENCIA DE ASISTENCIA A MANIFESTACIONES
(Total nacional 1980-1986)

	Julio 1980	Mayo 1983	Enero 1984	Febrero 1986
Muy a menudo	2	1	2	1
Bastante a menudo	5	3	4	5
Poco a menudo	12	11	14	14
Nunca o casi nunca	78	84	78	76
NS/NC	3	1	2	4
TOTAL	100	100	100	100
(N)	(3.457)	(2.495)	(2.949)	(2.454)
N.º Estudio	1.237	1.350	1.390	1.517

Con todo esto, si hubiera que intuir cuál es el «manifestante tipo» (1977) podríamos generalizar diciendo que se trata de un varón, menor de treinta años, soltero, residente en una gran urbe, con estudios de grado medio o universitarios, en situación de paro y que no asiste nunca a misa.

Avanzando en los años ochenta, la asistencia a mítines fue descendiendo, pero la asistencia a manifestaciones se mantiene a niveles similares. Así se observa en los llamados barómetros del CIS (Cuadro 2), en donde se constata que entre un 4 y un 7 por 100 afirma asistir «muy a menudo o bastante a menudo». Estas cifras hay que interpretarlas con cautela, ya que el margen de error (3 por 100) y la ambigüedad de las categorías de la pregunta así lo aconseja.

Seguidamente se tratará de evaluar cuál es el número de movilizaciones que se celebran anualmente.

2. *Cifras oficiales*

A diferencia de otros indicadores sociales, económicos, políticos, criminológicos, etc., que muestran tasas y cifras estadísticas (tales como número de matrimonios por cada 1.000 habitantes, IPC, inflación, porcentaje de votos, porcentaje de abstención, kilogramos de droga decomisada, tasa de suicidios, número de huelgas, etc.), los indicadores de conflictividad o de uso de esta práctica participativa (convencional o no convencional) han sido casi siempre ignorados.

En nuestro país, las cifras oficiales sobre número de manifestaciones celebradas en la calle (reuniones públicas a cielo abierto) han sido prácticamente inexistentes hasta finales de la década de los años ochenta. Es a partir de 1986 cuando el Ministerio del Interior o los gobernadores civiles han ido facilitando algunos datos, más o menos detallados, sobre estos comportamientos colectivos. Nos centraremos en los datos referidos al ámbito geográfico estatal y al de Madrid (capital). (Obsérvese el Cuadro 3.)

Del Cuadro 3 se desprende que entre 1988 y 1991 el número total de manifestaciones se duplica (tanto el total estatal como el de Madrid). Del mismo modo, el número de convocatorias que no se ajustan a la Ley de Reunión de 1983 crece ostensiblemente y alcanza a siete de cada diez convocatorias. Estas cifras explican —aunque no justifican— la decisión gubernamental de imponer sanciones administrativas a los convocantes de manifestaciones «no comunicadas» previstas en la recién aprobada Ley de Seguridad Ciudadana. Del mismo modo se constata que entre un 8 o un 9 por 100 del total de convocatorias se realiza en la capital del Estado.

III. ESTUDIO DE LAS MANIFESTACIONES

Tras conocer el perfil del manifestante y las cifras oficiales de convocatorias entraremos en el estudio propiamente dicho.

Cuadro 3

NUMERO DE MANIFESTACIONES (Cifras oficiales)

(ESTADO, 1987-1991)

TIPO	AÑO							
	1987		1989		1990		1991	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Manif. «comunicadas»	1.281	35,0	2.768	31,2	2.838	30,1	3.209	27,2
Manif. «no comunicadas»	2.456	65,0	6.112	68,8	6.622	69,9	8.606	72,8
Total año	3.737	100,0	8.880	100,0	9.460	100,0	11.815	100,0
	(1)		(2)		(3)		(4)	

(MADRID, 1988-1991)

TIPO	AÑO							
	1988		1989		1990		1991	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Manif. «comunicadas»	347	51,7	221	28,2	245	30,0	328	31,0
Manif. «no comunicadas»	324	48,3	562	71,8	570	70,0	731	69,0
Total año	671	100,0	783	100,0	815	100,0	1.059	100,0
	(5)		(6)		(7)		(8)	

El método de investigación sociológica se centra, pues, en la observación de múltiples casos particulares que reúnan unos requisitos o condiciones establecidas previamente. Se aplica, por tanto, el método cuantitativo. Por ello, la labor

(1) J. Barrionuevo en el Congreso de Diputados el 22-6-1988.

(2) J. L. Corcuera en el Congreso de Diputados el 19-12-1990.

(3) Representante del Ministerio Interior en programa TV «Tribunal Popular» (1991).

(4) DGPI, *El Mundo*, 5-2-1991.

(5) En *Diario 16*, 17-1-1990.

(6) Delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor, el 16-1-1990.

(7) Jesús Pedroche, del PP (Asamblea de Madrid el 3-12-1991 (en Comunidad Autónoma, 970 según la Delegación del Gobierno).

(8) Delegado del Gobierno en Madrid, S. Crespo, el 29-1-1992.

más ardua y laboriosa es, sin duda, la de la búsqueda y localización del máximo de casos, con vistas a una mayor exactitud en el resultado final. Una vez reunidos éstos, se diseña una tipología adecuada para su posterior interpretación. Dicha tipología incluye también una codificación coherente que ofrezca una mayor optimización de la base de datos empleada.

Se especifica el trabajo «de calle» (observaciones directas), y las fuentes consultadas: documentación (actores colectivos), hemeroteca (*El País*, *ABC*, *El Mundo* y otros), testimonios, etc. En cuanto a datos oficiales, se cuenta con los comunicados gubernativos publicados en los *mass media*, sin haber tenido acceso a otros más detallados («inexistentes» o «no accesibles», según los períodos). Con la confrontación de cifras y versiones se pueden obtener datos satisfactoriamente fiables.

La «guerra de cifras» que se desata en los medios de comunicación tras cada movilización hace imposible saber el respaldo exacto de participantes en estos fenómenos. A pesar de ello, y aún con el inevitable margen de error, podemos saber si una campaña ha tenido más o menos apoyo que otra o si la presión movilizadora ha sido mayor un año respecto a otro. Así, en Madrid, si sumamos todos los asistentes/año a todas las manifestaciones que conforman la muestra sabemos que de 311.000 (1990) a 2.106.000 (1981) manifestantes se movilizan cada año. Aún así, no existe coincidencia, y para demostrarlo valga el ejemplo del año 1991: según fuentes oficiales, se manifestaron en Madrid 332.055 personas, mientras que el estudio aquí realizado suma un total de 680.615 asistentes. Si se hiciera caso a las cifras facilitadas por los convocantes —siempre exitosas—, la suma total rondaría los 4.000.000 de manifestantes.

Estas sumas no son indicativas si no las relacionamos con la media de asistentes por convocatoria/año, y aún así no sabemos si se trata de manifestantes que participaron una vez o un participante que lo hace varias veces. Todo ello con independencia de las múltiples y a veces contrapuestas reivindicaciones que originan estas movilizaciones (sectores o movimientos que se activan o desactivan).

Con todo ello, para obtener estos datos se cumplimentan las distintas variables o *items* que integran cada unidad de observación (3.030 casos), logrando con ello hacer operativo el análisis del fenómeno «manifestación» desde diversos ángulos de estudio. Ello permite conocer los datos de comportamiento que hacen referencia a la organización (meses, días y horas elegidas, tipo de manifestación, recorridos, convocantes, apoyos, reivindicaciones, etc.) y al desarrollo de las convocatorias (asistentes, líderes, consignas, clima pacífico o violento, intervenciones policiales, detenidos, etc.). Una variable abierta denominada «observaciones» permite añadir datos cualitativos, reutilizables en posteriores análisis tras una adecuada recodificación.

Sobre la representatividad de la muestra aquí estudiada, y aún desconociendo datos oficiales anteriores a 1986, podemos concluir que el estudio abarca, para cada año, entre el 35 y el 52 por 100 del total de manifestaciones, discriminando involuntariamente diversas convocatorias de las cuales se tienen referencias incompletas, ya que éstas suelen ser pequeñas movilizaciones repetitivas no reflejadas en medios de comunicación y generalmente localizadas en zonas periféricas.

3. *¿Grupos o masas?*

Durante todo el proceso de transición y consolidación democrática se han hecho múltiples reflexiones sobre la tesis de la desmovilización. A favor de la misma se argumenta que al logro democrático y al aumento de los niveles de bienestar se une la caída de las ideologías y, por consiguiente, el retraimiento de las solidaridades. A ello se puede añadir el cansancio, producido por ciertas decepciones o frustraciones, de la base social activa respecto a líderes y organizaciones.

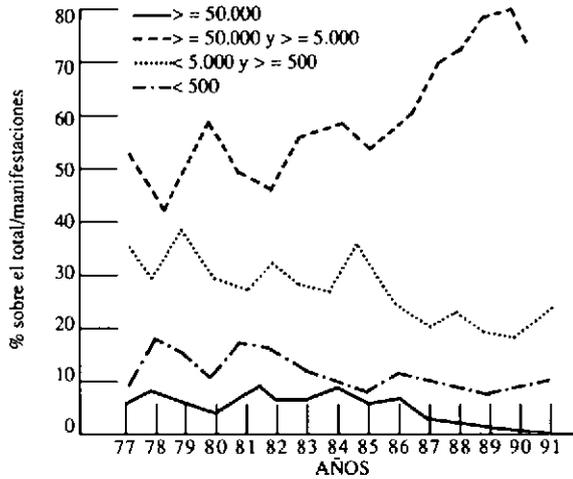
Autores como Clauss Offe o Kriesberg constatan la llamada «crisis de representación», que se observa en regímenes democráticos consolidados. Los estudios empíricos de cultura política y socialización política muestran una tendencia creciente hacia fórmulas de representación formal. Algunos sectores de la ciudadanía (juveniles, principalmente) se sienten distanciados o ajenos a las instituciones representativas (Parlamento y gobierno). El descenso de afiliación a partidos políticos y sindicatos es otro hecho constatado. Por tanto, la relación de representación se vuelve formal. Ya en 1984 Marina Subirats, en su estudio sobre la transición política española, observa este fenómeno definiéndolo como «un signo de normalidad democrática», aunque afirma también que «parece producirse de una manera prematura».

Entre 1976 y 1991 (ambos inclusive), en Madrid se han celebrado al menos 78 movilizaciones de carácter multitudinario (con 50.000 o más asistentes). Sin embargo, la manifestación tipo más cotidiana es mucho más modesta en número de asistentes. Así, durante el período estudiado, seis de cada diez manifestaciones no superan la cifra de 500 asistentes (ocho de cada diez en 1989). Si en 1978 el 18 por 100 de las manifestaciones tienen una asistencia entre 5.000 y 50.000 asistentes, en 1989 igual tamaño sólo se registra en el 1,6 por 100 de los casos. (Véanse Gráfico 1 y Cuadro 4.)

Hasta 1981, el número de manifestaciones ilegales superaba a las autorizadas. En dicho año se produce la confirmación de los cambios de tendencia en los criterios de legalidad, superando las legales a las que no lo son. Se observa, pues, un mayor aprendizaje y práctica democrática por parte de los manifestantes en lo que respecta al ejercicio de este derecho y un cambio de actitudes en los comportamientos policiales.

Gráfico 1

TAMAÑO DE LAS MOVILIZACIONES
(Porcentaje anual de manifestaciones
según el número de asistentes por convocatoria)
MADRID, 1977-1991



Cuadro 4

TAMAÑO DE LAS MOVILIZACIONES
(Porcentaje anual de manifestaciones
según el número de asistentes por convocatoria)
MADRID, 1977-1991

AÑO	>= 50.000	<= 50.000 >= 5.000	>= 5.000 >= 500	<= 500	N %
	%	%	%	%	
1977	4,1	8,2	34,7	53,0	100
1978	7,5	18,1	27,6	46,8	100
1979	5,7	15,1	37,7	41,5	100
1980	2,8	9,3	28,7	59,2	100
1981	8,2	16,4	26,3	49,1	100
1982	5,7	15,7	31,4	47,2	100
1983	5,5	11,5	27,9	55,1	100
1984	7,2	8,8	26,4	57,6	100
1985	4,2	5,6	36,4	53,8	100
1986	5,6	10,6	27,5	56,3	100
1987	1,5	8,8	21,7	68,0	100
1988	1,4	5,6	22,6	70,4	100
1989	0,7	1,6	17,9	79,8	100
1990	0,2	2,4	17,0	80,4	100
1991	0,4	3,8	23,6	72,2	100
TOTAL 1977-1991	2,6 (78)	6,9 (207)	25,4 (764)	65,1 (1.952)	100 (3.001)

Desde 1983 hasta 1991 aumenta el número de manifestaciones, al igual que se generaliza un descenso de la media de asistencia a las mismas, exceptuando campañas concretas. La causa de este crecimiento se debe, sin duda, al desarrollo legislativo y consolidación de los derechos y libertades políticos reconocidos constitucionalmente (derechos de expresión, libre sindicación, asociación, partidos políticos, reunión, etc.). Ello favorece la expresión atomizada de múltiples demandas por parte de toda la pluralidad de grupos minoritarios y corporativos y enriquece la participación política institucionalizada por nuestro sistema democrático. A pesar de ello, a partir de 1986 se constata un aumento de las movilizaciones semilegales o semi-ilegales, según se quiera (las no comunicadas), que chocan con otros derechos individuales.

Salvo excepciones, los grandes conflictos se resuelven en el Parlamento, quedando la calle como escenario de los problemas de los sectores políticos extraparlamentarios y de los viejos y nuevos movimientos sociales (sindical/corporativo, vecinal/ciudadano, estudiantil/alternativo, etc.). Estas tendencias determinan que el número de movilizaciones que se consideran masivas desciendan mientras que el porcentaje de manifestaciones que afectan a pequeños grupos o colectivos sociales aumenta.

Se observa una relación directamente proporcional entre el establecimiento de libertades públicas y la disminución del respaldo a las convocatorias. En 1989 y 1990 el 80 por 100 del total de movilizaciones estudiadas reúnen a menos de 500 asistentes (el 41 por 100 en 1979). De igual modo (véase Cuadro 4), en los años noventa sólo el 0,4 por 100 supera la cifra de 50.000 asistentes (el 8,2 por 100 en 1981).

2. *El espacio simbólico*

El escenario de las movilizaciones viene determinado por varios factores, entre ellos: asistencia esperada, autorización, impacto sobre el vecindario circundante, facilidades de acceso, proximidad al destinatario de la protesta (edificios) y zona socialmente favorable a la reivindicación. En referencia a esto último se constata que la zona este al Paseo de la Castellana es más utilizada por los sectores conservadores. Los sectores progresistas recurren más a la utilización del lado oeste o izquierdo de dicho eje (que incluye casco antiguo). Esta generalización no excluye numerosos casos concretos en que esto no es así.

En el caso que nos ocupa se podría, por ejemplo, evaluar el peso real de la conflictividad que sufre una ciudad como Madrid —con sus microconflictos propios de una gran urbe—, que, por añadidura, es capital del Estado y, por tanto,

centro de poder político de toma de decisiones. Ello implica la «importación» centrípeta de problemas y protestas no resueltos en otras Administraciones y zonas periféricas o punto de encuentro de macroconflictos. Sus calles son escenario privilegiado del pulso que mantienen los poderes políticos y económicos con aquellos grupos de presión que, más alejados del centro de decisión, recurren a las manifestaciones como medio para exteriorizar sus demandas. Los conflictos municipales y autonómicos, propios de la organización local, abarcan en conjunto sólo el 30 por 100 de las convocatorias ante edificios oficiales registradas en los años 1985-87. Cerca de nueve de cada diez manifestantes que reivindican algo a la Administración lo hacen ante los poderes centrales del Estado. En ello incide, sin duda alguna, la capitalidad. En el caso de Madrid, la ausencia de movilizaciones de tipo autonomista o nacionalista tiene como contrapartida la «importación» de otros conflictos periféricos.

Se confirma la tendencia del aumento de convocatorias y manifestantes ante edificios de la Administración local, autonómica y central. Así, por ejemplo, en 1985 un 22,4 por 100 de las convocatorias celebradas en Madrid parte, transcurre o concluye ante un edificio oficial. A estas movilizaciones asiste sólo un 4,2 por 100 del total de los movilizados. Sin embargo, en 1987 los porcentajes superan el 48 y el 28 por 100, respectivamente.

Si además analizamos el peso de conflictividad que sufre el distrito Centro se ve aún más la importancia simbólica que tiene la ocupación espacial de las calles céntricas por parte de los manifestantes. Así, por ejemplo, en 1990 el distrito Centro vive en sus calles el desfile del 39 por 100 del total de manifestaciones celebradas en la capital (con el 34 por 100 del total de asistentes). Para 1991 estas cifras alcanzan el 36 y el 48 por 100, respectivamente.

3. *Ciclos de movilización*

La posible existencia de ciclos de conflicto, y cómo éstos se activan y desactivan, centran en la actualidad gran parte del debate intelectual de sociólogos y politólogos interesados en este vasto campo.

El interés de observar cómo se desarrolla la acción colectiva reside en la localización y posterior análisis de las fases de consenso y conflicto que jalonan el proceso de transición democrática española. El estudio de un amplio período de nuestra más reciente historia permite responder en gran medida al cómo, cuándo, dónde y por qué surgen los movimientos sociales, así como sus fases de decadencia, disgregación y transformación. Por tanto, las cúspides de movilización, conocidas o sufridas por la opinión pública, son tan sólo la punta del iceberg de una protesta o conflicto.

En el ámbito participativo, el interés reside en profundizar en la cuantificación del fenómeno de desmovilización, al que aluden diversos autores, pero que en pocos casos se ha intentado medir con rigor. Son ampliamente conocidos los datos que revelan lentos pero constantes descensos en el interés de los ciudadanos por la política, así como el descenso del «compromiso político» (afiliación a partidos políticos (J. Esteban), sindicatos (V. Pérez Díaz, OCDE), cotizantes (M. Duverger), participación electoral (J. R. Montero), etc. Todo ello nos lleva a constatar una raquítica participación política (María Luz Morán).

Una de las herramientas empíricas que emplea la sociología para el estudio de los fenómenos sociopolíticos es el criterio temporal o de correspondencia cronológica. Si se quiere hacer un seguimiento de los distintos actores colectivos, se recurrirá inevitablemente a su evolución. Con ello, tal como afirmaba Habermas, se puede interpretar los episodios de demanda que se suceden en el tiempo. De este modo, tampoco se descarta el abordar dichos episodios estableciendo la relación causa-efecto, si bien dicha relación es equívoca a partir del momento en que desconocemos cuáles son los factores de «éxito» o fracaso de una determinada campaña política o el grado de incidencia de un factor entre otros muchos (estructurales, psicológicos, externos, teoría de los juegos, oportunidad política, «mano invisible», casualidades, etc.).

Uno de los rasgos que nos muestra la «estabilidad» de todo el proceso de la transición es el equilibrio existente en la distribución temporal de los conflictos. Así, en la medida anual de convocatorias por trimestre se observa cierta uniformidad en la presión de la calle por parte de las organizaciones. Si exceptuamos el tercer trimestre (julio, agosto, septiembre), los tres restantes tienen porcentajes muy similares de convocatorias respecto al total anual (± 30 por 100).

El criterio anual permite analizar las movilizaciones en iguales períodos de tiempo y, en consecuencia, valorar los aumentos y descensos de apoyos de cada sector y movimiento. Ello permite la obtención de unos resultados anuales, irrepetibles, pero comparables entre sí.

La relación «número de convocatorias/número de movilizados» es, sin duda, la más interesante. Cuando un sector político o movimiento social realiza una campaña de movilizaciones es en gran medida restando el espacio (al menos en cuanto a protagonismo se refiere) de otros partidos, sindicatos o colectivos. Existe un criterio de prioridades reivindicativas que eclipsan ante la opinión pública otros conflictos menores.

La pluralidad de las organizaciones políticas o sociales (algo exclusivo del sistema democrático) determina a su vez una diversificación del protagonismo de la calle. Así en la década de los ochenta existe una mayor pluralidad de los sectores políticos y movimientos sociales convocantes. El excesivo protagonismo de uno de ellos durante un período determinado (trimestre, año, etapa...) indica una

tensión social o situación anómala en el sistema político. Así, por ejemplo, si durante un año concreto más del 50 por 100 de las convocatorias o de los asistentes a manifestaciones lo hacen integrados en un mismo sector o movimiento se puede considerar que existe una fuerte tensión —con riesgo de crisis— en el sistema político.

En nuestro país, tras el 23-F y la repercusión de la movilización civil del 27-F, se producen importantes cambios en el esquema de movilización observado en los años setenta. Por una parte, la izquierda (IZQ, EIZ) sufre un proceso de desmovilización y transformación en nuevos movimientos sociales (ALT, SOL), mientras que la base social de los sectores involucionistas de extrema derecha (EDE) adopta posiciones más moderadas (DER), iniciando a partir de entonces una participación más activa dentro del propio sistema de libertades democráticas (movimiento vecinal, movimiento corporativo, movimiento estudiantil...). Ello se observa en la presencia o influencia de sectores conservadores en distintas campañas (LODE, LOGSE, droga, Autonomía de Ceuta y Melilla, etc.). El fenómeno de la movilización deja de ser patrimonio de «la izquierda» o de «las masas» y sus protagonistas son, en gran medida, de las clases medias. La emergencia de «la nueva clase media» [sin concienciación, pero que se reconoce como tal (A. Giddens)], así como el aumento del sector no mercantilista o periférico, añaden nuevos valores al «paradigma del modo de vida» (Raschke).

En todos los años, el movimiento sindical es el que convoca más movilizaciones (del 22,2 al 43,4 por 100, según el año), lo cual puede considerarse como un fenómeno normal en el presente siglo. En cuanto al número de asistentes, vemos que sí existen disfunciones y casos de excesiva «tensión social», como sucedió en 1980 (meses antes del 23-F), año en que uno de cada dos manifestantes seguía las consignas de las organizaciones de extrema derecha (54,9 por 100 del total de manifestantes en Madrid del año 1980). En contrapartida, en 1981, seis de cada diez manifestantes se movilizaban unitariamente por la democracia, la libertad y la Constitución. En 1986, la polarización de la campaña OTAN se traduce en una alta participación del movimiento alternativo (ecologistas, pacifistas, etc.), que alcanza el 52,7 por 100. Por su parte, la presión del movimiento sindical supera en 1977 el 50 por 100 del total asistentes/año (firma de los Pactos de la Moncloa). En 1988 (año de la huelga 14-D), siete de cada diez manifestantes (el 69,4 por 100) respaldaba a los sindicatos mayoritarios. Se supera otra vez dicho umbral en 1990 (Plataforma Sindical Prioritaria). Con independencia del número real de manifestantes, estos porcentajes sirven para mostrar el atípico protagonismo o preponderancia (cúspides de los ciclos movilizados) de un movimiento social respecto a los demás.

Cuadro 5
PARTICIPANTES EN MANIFESTACIONES SEGUN CONVOCANTE (MADRID)
 (En porcentajes sobre el total anual)

SP (*)	1977	1979	1980	1981	1982	1986	1988	1990
EDE	21,1	30,1	54,9	12,2	1,8	9,5	3,6	2,6
DER	—	—	—	—	8,0	0,1	0,0	2,2
UNI	—	—	—	56,6	—	6,1	2,7	—
IZQ	1,2	0,6	2,8	16,6	56,6	0,4	2,1	1,0
EIZ	2,3	0,0	0,9	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5
ANA	0,0	0,1	0,1	—	—	—	—	—

MS (*)	1977	1979	1980	1981	1982	1986	1988	1990
SIN	53,5	57,7	27,0	6,6	26,6	16,3	69,4	52,6
VEC	20,0	2,5	9,5	6,0	2,6	0,5	7,0	11,1
EST	1,7	4,6	3,6	0,1	0,1	8,1	7,7	3,3
ALT	0,2	4,1	1,2	1,9	3,9	52,7	4,1	9,9
CAM	0,0	0,3	—	—	0,0	5,8	1,2	9,7
SOL	0,0	0,0	0,0	—	0,3	0,1	1,1	2,7
COR	0,0	—	—	—	—	0,2	0,1	3,8
TOTAL								
(en miles)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
(N)	(1.204)	(1.363)	(676)	(2.106)	(885)	(1.142)	(717)	(311)

No podemos ignorar que el aumento de los asistentes a convocatorias de un sector o movimiento determinado viene dado no sólo por la asistencia de los militantes, simpatizantes e incondicionales, sino que a ellos se suman otros apoyos, más o menos asiduos, que proceden de la desmovilización de otros sectores o movimientos afines. Existe, por tanto, un sistema de «vasos comunicantes» entre unos y otros. Estas evoluciones son puramente coyunturales y, en ocasiones, suponen la aparición de un nuevo movimiento social o la consolidación de un sector político. A ello se añaden los «participantes acomodaticios» que, tal como afirma S. Tarrow, son los primeros en desmovilizarse cuando se consiguen parciales éxitos o cuando se cansan de los costes y riesgos de la movilización. Del mismo modo se constata la existencia de períodos de paso de lo privado a lo público (según ciclos de consumo), tal como afirma A. Hirschman, si bien éstos no son generalizados y se presentan de forma desigual.

(*) SP: Sectores políticos; MS: Movimientos sociales.

A modo de conclusión, se puede afirmar que en un sistema democrático asentado el resultado a la manifestación no puede concebirse como un elemento desestabilizador que busca la destrucción de la convivencia ciudadana. La evolución del derecho de manifestación provoca un cambio en el comportamiento de los grupos de presión en la vía pública (presencia en las calles cotidiana, generalmente pacífica y organizada) que exige un nuevo planteamiento de respeto a su ejercicio por parte de los poderes públicos. Siendo éste un derecho reconocido como fundamental en la Constitución, no puede tratar de recortarse alegando que provoca colapsos viarios, tanto menos si se tienen en cuenta que casi el 80 por 100 de las convocatorias celebradas en 1990 en Madrid no reunieron a más de medio millar de manifestantes.

Expresar las diferencias de opinión no debe ser un problema en un sistema plural y democrático. La participación ciudadana en el desarrollo político y social del Estado no puede sino dar fuerza y consolidar aquello que nace con el apoyo de todos.